

## **Anuario Internacional CIDOB 2003 edición 2004**

### **Claves para interpretar la Política Exterior Española y las Relaciones Internacionales 2003.**

Seguridad y poderío militar de Brasil.

# Seguridad y poderío militar de Brasil

La aproximación a la problemática de la seguridad brasileña se ha de realizar en clave interna y en relación con el papel de los militares en la vida política del país. En las primeras décadas del siglo XX se conceptuó al ejército como el agente central de la unidad nacional brasileña, en el entendimiento de que el desarrollo económico, la preparación militar y el poderío nacional estaban íntimamente ligados y había que proteger la inmensa riqueza natural del territorio de ambiciones exteriores. Los oficiales reformistas (denominados "Jóvenes Turcos") pensaban que la ausencia de cohesión nacional era la gran amenaza para el país, mucho más que los riesgos externos.

A finales de los años veinte el Estado había incrementado sus poderes centrales expandiendo la propiedad federal sobre los ferrocarriles, las líneas de navegación y los bancos, y controlaba la comercialización del café en busca de la influencia en los precios internacionales. Sin embargo, muchos jóvenes oficiales se mostraban preocupados por los intereses que dominaban el Estado y el ejército. En este sentido, la rebelión de los tenientes (tenentismo) representó una revuelta contra la jerarquía militar y contra el gobierno central. En las revueltas de los años treinta, la alianza de los tenientes con políticos anticentralistas y opositores generó su transformación en uno de los instrumentos más poderosos de las oligarquías disidentes de Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, y Paraíba. La rebelión fue un éxito en los años treinta porque la estructura de mando del ejército se colapsó, y la insurrección ganó el control de quince de los veinte estados del país, generando una purga entre los altos oficiales y abriendo una era de reformismo.

Tras estos sucesos, los militares se convirtieron en un poder moderador de las relaciones cívico-militares en los sucesivos golpes de Estado que sufrió el país (1930, 1945, 1954 y 1955), pero hasta el golpe de 1964 nunca asumieron directamente el poder político. Los militares ejercían el poder de intervenir en la escena política cuando lo creían necesario para resolver crisis institucionales o problemas políticos, pero su modelo de comportamiento significaba la devolución rápida del poder político a los civiles. Los militares basaban su filosofía de gobierno en un apoyo moderado de la sociedad y en la completa unidad militar.

No obstante, con el tiempo, surgieron dos facciones: los llamados "sorbonistas", seguidores de la ideología emanada de la Escuela Superior de Guerra (vehículo de entrenamiento para los objetivos de seguridad interna y desarrollo económico), moderados en lo político y deseosos de mantener las formas e instituciones democráticas. Y los de la línea dura, que favorecían la suspensión del proceso democrático.

También existía una tensión entre los papeles defensivos internos y externos de los militares. Tras la Segunda Guerra Mundial, la orientación dominante era la interna, debido a la confrontación bipolar y los procedimientos de mantenimiento de la paz de la OEA (Organización de Estados Americanos), así como a causa de los programas de estudio de la Escuela Superior de Guerra y de la Escuela De Mando del Estado Mayor del Ejército. A medida que se profundizaba la crisis brasileña de los años sesenta, los militares percibieron que el país entraba en una era de guerrilla subversiva, que abonó el terreno para el golpe de 1964. Esta línea de pensamiento se vio reforzada por los cambios revolucionarios en Asia y África, y sobre todo en Cuba, y se basaba ideológicamente en la "Doctrina de Seguridad Nacional" y las teorías de guerra anti-subversiva y la contrainsurgencia que se habían estudiado en las escuelas militares desde los años cincuenta. A ello se unió el apoyo de importantes segmentos de la sociedad que, temiendo el incremento de poder de las corrientes izquierdistas, apoyaron o participaron en el golpe militar.

En los primeros años de dictadura militar, y a causa del descontento por las tareas propias de los paramilitares que se le estaba encargando, en el seno del ejército se desarrolló una lucha de poder que condujo a la derrota de la facción de Castelo Branco y el ascenso de los partidarios de la línea dura, en torno al ministro del Ejército, luego presidente, Arthur da Costa e Silva, con lo que la idea de que la misión principal del ejército era la seguridad interna se transformó en hegemónica. Los militares elaboraron una idea de nacionalismo y desarrollo que se ha incorporado en el pensamiento de los líderes civiles de opinión y los políticos, según la cual Brasil puede y debe ser una gran potencia.

Entre 1968 y 1974 (período conocido como "años de chumbo") finalizó la presidencia de Costa e Silva y se inició, tras un breve lapso de Junta Militar, la del general Médici, que fue la etapa más autoritaria y represiva. Hasta 1985, la presidencia del general Ernesto Geisel intentó liberalizar el régimen y controlar a los partidarios de la línea dura, llegando él mismo a nombrar a su sucesor, João Figueiredo, quien concluyó la transición política y transfirió el poder a un presidente civil. El proyecto de Geisel ponía más el énfasis en la liberalización que en la democratización, y mostró mayor preocupación por controlar las agencias militares que se habían dedicado a la represión y a tareas de inteligencia, y que habían adquirido un alto nivel de autonomía.

La transición a la democracia en 1985 se realizó bajo control militar. Tanto Tancredo Neves como José Sarney fueron presidentes que habían apoyado el régimen militar en los años

anteriores. Aunque los militares cedieron parte de su poder a José Sarney (1985-90) en 1985 retuvieron prerrogativas importantes. Sarney dependía de las fuerzas armadas, ya que carecía de base política y estaba mal preparado para asumir la presidencia, no pudiendo ganar control sobre las fuerzas armadas. El Congreso reformó la Constitución, que fue promulgada en 1988. En ella, se fortaleció el poder presidencial sobre los militares y en 1989 se celebró la primera elección presidencial directa en treinta años, que convirtió a Fernando Collor de Mello en presidente en 1990. Durante su presidencia, las prerrogativas de las fuerzas armadas se redujeron muy modestamente y de manera errática. En estos mismos años, se fortalecieron las instituciones políticas civiles, especialmente el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Congreso, en temas relacionados con la defensa. Sin embargo, el aislamiento político de Collor al cabo de un año de su presidencia le llevó a realizar concesiones a los militares a cambio de apoyo.

Las relaciones con los militares se incrementaron durante las presidencias de Itamar Franco y Fernando Enrique Cardoso. Se trabajó sobre la base de que las fuerzas armadas debían obedecer a una dirección política. La materialización más importante fue la creación en 1998 de un Ministerio de Defensa por primera vez en la historia brasileña, que agruparía los diferentes ministerios relacionados con lo militar que había en épocas precedentes.

En sintonía con la orientación hacia la seguridad interior, desde 1945 las fuerzas armadas brasileñas no se han visto implicadas en combate en el exterior del país. Las ocasiones en que se han enviado fuerzas al exterior han estado motivadas por demandas de las Naciones Unidas para participar en operaciones de mantenimiento de la paz, con la excepción de la solicitud de la OEA, bajo reclamo del presidente norteamericano Johnson, para intervenir en la República Dominicana. A partir de la década de los noventa, Brasil ha participado en misiones de Naciones Unidas en Angola, Mozambique, El Salvador, la ex Yugoslavia y Rwanda.

Sin embargo, las fuerzas armadas sí han estado influidas desde el exterior por las doctrinas europeas –francesas y alemanas– y, sobre todo, norteamericanas. Tras la Segunda Guerra mundial, la relación bilateral con Estados Unidos fue intensa, por medio del Acuerdo de Asistencia Militar de 1952, por el que se proporcionaba entrenamiento militar y armamento a Brasil. A finales de los sesenta la relación se deterioró como consecuencia de las restricciones de EEUU a la transferencia de armas a América Latina y de la propia búsqueda brasileña de una política exterior más asertiva. En 1977 Brasil abrogó unilateralmente el acuerdo de 1952 como reacción a las presiones del presidente Carter para que se mejorase la situación de los Derechos Humanos y para que Brasil rescindiera el acuerdo nuclear con la República Federal Alemana. En los ochenta se produjo una nueva aproximación hacia Estados Unidos debido a la política del presidente Reagan; en 1983 ambos países firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación industrial militar. Sin embargo, las relaciones siempre se mantuvieron distantes por las discrepancias norteamericanas respecto a los programas nuclear y espacial

brasileños y su potencial aplicación militar, y por la política de transferencia de armamento de Brasil.

En los años setenta, Brasil redujo su dependencia militar del exterior y diversificó sus proveedores –además del principal, Estados Unidos, importó de países europeos y de Rusia–. En 1980 Brasil se convirtió en exportador neto de armamento y fue uno de los países que más armas exportó a los países en desarrollo, especialmente a Oriente Medio (el 50% de sus exportaciones entre 1977 y 1988, de las que la mayoría tenían Irak como destino). Una tendencia que se mantiene en la actualidad: Brasil es uno de los mayores exportadores mundiales de armamento, tiene una agresiva política de ventas y no prohíbe revender sus exportaciones.

La capacidad nuclear de Brasil es la más desarrollada de América Latina. El programa nuclear se remonta a la década de los años treinta, cuando se inició la investigación de fisión nuclear, con científicos contratados en el extranjero. El descubrimiento de grandes depósitos de uranio en el país facilitó el desarrollo del programa. En 1940 el presidente Getúlio Vargas firmó un acuerdo con Estados Unidos para la cooperación en la extracción de uranio y monacita, al que siguieron otros tres acuerdos por los que Estados Unidos transfería tecnología nuclear a cambio de monacita. En los años cincuenta Brasil intentó desarrollar una postura nuclear independiente, aunque también continuó recibiendo la asistencia técnica de Estados Unidos, quien, bajo el programa Átomos para la Paz, retenía el control tecnológico y sobre los subproductos creados por los reactores brasileños. Descontento con las restricciones impuestas por Estados Unidos, en 1975 Brasil optó por comprar tecnología nuclear a la RFA sin depender del exterior para el enriquecimiento y el reprocesamiento. A diferencia de los pactos con Estados Unidos, el de la RFA estaba libre de las salvaguardas requeridas por el OIEA (Organismo Internacional de la Energía Atómica), y Brasil transfirió tecnología de sus centrales nucleares a un programa secreto para desarrollar la bomba atómica. Tras la transición a la democracia, en 1988 se dio publicidad al programa nuclear y se tomaron medidas para controlarlo y restringirlo, revelando que se habían diseñado ya dos bombas atómicas y que el régimen militar había exportado ocho toneladas de uranio a Irak en 1981.

La relación con Argentina, uno de los grandes competidores de Brasil en la carrera nuclear, se modificó a partir de 1980 cuando ambos países firmaron un Acuerdo sobre el Uso Pacífico de la Energía Nuclear. Tras declaraciones varias en los años siguientes, en 1990 los presidentes Collor de Mello y Carlos Menem firmaron la Declaración sobre una Política Nuclear Común de Foz de Iguazú, por la que se comprometían a un uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear. Un año después, en 1991, los dos países firmaron con el OIEA completas salvaguardas para las instalaciones nucleares. En 1994 Brasil también firmó el Tratado de Tlatelolco y ratificó en 1997 el Tratado de No Proliferación Nuclear.

El control de la Amazonia es una de las preocupaciones actuales más importantes del país. En 1985 el ejército inició el proyecto del Corredor Norte (Calha Norte), la construcción de una serie de emplazamientos militares de vigilancia de la

frontera brasileña con Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guyana Francesa. La escalada de la guerra contra la droga en las zonas andinas ha hecho que el narcotráfico modifique sus rutas de comercialización y Brasil se haya convertido en un punto intermedio para la droga enviada a África y Europa. De la misma forma, productores de droga de Colombia, Perú y Bolivia utilizan el territorio brasileño como protección. Los militares brasileños han sido reticentes a implicarse en la guerra contra la droga, actividad que piensan que es responsabilidad de la Policía Federal, temiendo también que Estados Unidos instrumentalice el tema de la droga para asegurarse una mayor presencia en el país. No obstante, los militares han facilitado apoyo logístico y de inteligencia para la lucha antidroga y en la contención de la circulación ilegal de armas. Brasil teme una extensión a su territorio del conflicto colombiano: afluencia de refugiados de guerra, miedo a plagas de hongos que se utilizan en Colombia para destruir las plantaciones de droga, y sobre todo el paquete de ayuda norteamericano antidroga conocido como Plan Colombia para combatir el narcotráfico, que bien pudiera desplazarse a territorio brasileño.

Pero además, el Plan Calha Norte, basado en el principio de ocupación territorial por razones de seguridad, pretendió reducir los grandes territorios contiguos indígenas, excluirlos de una zona de 62 km de seguridad desde las fronteras, y enfatizar la clasificación de los indígenas en "silvícolas" y "aculturados" con distintos derechos según la categoría. Las obligaciones del Estado respecto a los "aculturados" desaparecían o se reducían sensiblemente.

La seguridad en la Amazonia remite a los conflictos que se desarrollan en Brasil por la posesión de la tierra y su riqueza. Por una parte, en 1988 se realizó un compromiso constitucional para demarcar la tierra de los indios brasileños como muy tarde en 1993. Sin embargo, la fecha se incumplió y el trabajo aún está inacabado. Alrededor de 330.000 ciudadanos brasileños indígenas forman los 206 pueblos originarios ancestrales del territorio de Brasil. Los pueblos indígenas reclaman derechos legales en el 11% del territorio nacional. La gran mayoría de la tierra indígena (aproximadamente el 95%) se encuentra en la Amazonia, ocupando aproximadamente el 18% de la región; en ella viven alrededor del 50% de los indígenas. El resto habita en áreas del sur del Brasil en una superficie de menos del 2% del total de los territorios indígenas. Los territorios de las reservas indias contienen poca población y muchos recursos (agua, madera, oro,...). La tierra y sus recursos son propiedad del gobierno federal, pero las comunidades indias controlan el acceso y la actividad económica.

Por otra parte, la Constitución brasileña garantiza la distribución a los pobres de las áreas cultivables improductivas. No

obstante, la promesa del actual presidente *Lula* de asentar en estas tierras a 400.000 familias pobres en cuatro años ha dado pocos resultados, lo que ha aumentado el descontento del MST (Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra), un aliado tradicional del Partido de los Trabajadores de *Lula*. El MST promueve la ocupación de tierras y la reforma agraria. Los propietarios de tierras, que están en contra, controlan el 46% de la tierra cultivable del país.

La lucha por la tierra ha conducido a un incremento de la violencia en las áreas rurales, en la que se han visto implicadas más de un millón de personas en el año 2003. Hay familias sin tierra que necesitan plantar su cosecha para poder sobrevivir, e indios que necesitan las reservas para mantener su modo de vida y cultura. Adicionalmente, mercaderes, mineros y especuladores esperan obtener beneficios de la explotación de los recursos. Todos estos grupos se involucran diariamente en conflictos violentos, especialmente en los estados de Rio Grande do Sul, Espiritu Santo y Paraná.

Pero la violencia también afecta a las áreas urbanas, principalmente a las dos grandes ciudades, Sao Paulo y Río de Janeiro, debido a la gran concentración de población, la miseria y la delincuencia organizada. Los cuerpos policiales han estado a menudo implicados en la violencia urbana: las fuerzas de seguridad brasileñas (incluyendo la policía militar) han sido acusadas repetidamente de violar en forma sistemática los derechos de los ciudadanos. Hay historias de prácticas violatorias por la policía, como lo ha comprobado la justicia brasileña y reconocido el propio Gobierno en su Plan Nacional de Derechos Humanos. Si bien es cierto que en muchos estados existe un clima de violencia delincencial, hay evidencias de que la reacción de la policía no sólo excede los límites de lo legal y reglamentario, sino que en muchos casos los funcionarios policiales utilizan su poder, organización y armamento para actividades ilegales. Muchas de las muertes que se producen por acción de la policía no son por el estricto cumplimiento del deber, sino que están relacionadas con las llamadas "ejecuciones extrajudiciales" que ocurren como consecuencia de la participación de miembros de la policía estatal en grupos de exterminio. Los "escuadrones de la muerte" fueron establecidos por antiguos oficiales de la policía con el propósito de combatir el crimen. Aunque algunos integrantes de los escuadrones empiecen sus actividades como "vigilantes de seguridad", su contacto con delincuentes hace que frecuentemente terminen vinculándose con el tráfico de drogas y con diversas actividades delictivas, como la extorsión. Estos grupos operan en la impunidad debido, especialmente, a las amenazas, a la intimidación de testigos y fiscales, a investigaciones que son insuficientes para procesar a sus integrantes y a la ineficiencia del poder judicial para condenarlos.

## PODERÍO MILITAR DE BRASIL

### DATOS BÁSICOS

	2001	2002
Gasto defensivo % PIB (en millones de dólares)	1,3	1,5
Gasto defensivo (en millones de dólares)	8.898	9.957

## FUERZAS ARMADAS

Activos: 287.600 efectivos  
Reservas: 1.115.000 efectivos

### Fuerzas terrestres

- 189.000 efectivos organizados en siete mandos y doce regiones militares.
- 87 carros de combate, 286 carros ligeros, equipo de reconocimiento, 219 vehículos blindados, artillería oruga, artillería autopropulsada, morteros, armas guiadas anti-tanque, armas antiaéreas, misiles tierra-tierra, tierra-aire, 4 helicópteros de ataque.

### Fuerzas navales

- 48.600 efectivos, que incluyen 14.600 marines.
- Principales bases navales en Río de Janeiro, Salvador, Recife, Belém, Florianópolis y río Ladario.
- 4 submarinos
- 1 portaaviones
- 14 fragatas
- 5 corbetas
- 47 buques de patrulla y combate costero
- Equipo de contramedidas para minas
- 3 buques anfibios
- Aviación naval: 24 aviones de combate y 54 helicópteros armados

### Fuerzas aéreas

- 50.000 efectivos, distribuidos en siete regiones aéreas
- 254 aviones de combate

## FUERZAS PARAMILITARES

- 385.600 efectivos de las Fuerzas de Seguridad Pública

## FUERZAS EN EL EXTERIOR

- 71 efectivos en UNMISSET (Timor Este)

Fuentes:

- Elaboración propia a partir de información de:
- Celso CASTRO (2000) "The Military and Politics in Brazil: 1964-2000", *Working Paper CBS-10-00 (H)*, Working Paper Series, University of Oxford Centre for Brazilian Studies.
  - *Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Brasil*, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de los Estados Americanos, OEA/Ser.L/V/II.97, Doc. 29 rev.1, 29 de septiembre 1997.
  - Brazil, Library of Congress Country Studies, <http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/brtoc.html>
  - Ministerio de Defensa de Brasil (<https://www.defesa.gov.br/enternet/sitios/internet/index.php>)
  - SIPRI Yearbook 2003, Stockholm International Peace Research Institute, London, Oxford University Press.
  - The Federation of American Scientists ([www.fas.org](http://www.fas.org))
  - The Military Balance, 2002-2003, The International Institute for Strategic Studies, London, Oxford University Press.